

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA D EDECISIÓN LABORAL

ACCIONANTE	Celina del Socorro García de Salas
ACCIONADA	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP
RADICADO UNICO NACIONAL	05088310500220220057601
RADICADO INTERNO	2023-005
DECISIÓN	Declara nulidad
ACTA DE DECISIÓN TUTELA	No. 006

Medellín, nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, previa deliberación en la que adoptó el proyecto presentado por el Ponente JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a emitir decisión dentro de la acción de tutela referenciada:

ANTECEDENTES

La accionante invocó el presente mecanismo de amparo constitucional con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana y mínimo vital en conexidad con la seguridad social, solicitando

mediante la intervención del Juez constitucional se le ordene a la entidad accionada lo siguiente:

- 1) *Que se realicen las operaciones aritméticas tendientes a restituir el porcentaje que venia devengando por pensión de sobrevivientes del señor LAUTIER SALAS, y que me deducen por concepto de REINTEGRO COMPENSACIÓN por valor de \$425.529 (o según el IPC para el momento en que se tome esta decisión) y que acrecen la mesada pensional de sobreviviente en calidad de hija de la señorita MARÍA CAMILA SALAS GARCÍA.*
- 2) *Que el valor de REINTEGRO COMPENSACIÓN sea asumido en su totalidad por UNIDAD ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL y no por mi como pensionada sobreviviente del señor LAUTIER SALAS.*
- 3) *Las demás peticiones que el señor Juez considere para proteger mis derechos.*

Para sustentar lo anterior, indica que mediante Resolución 384 del 21 de marzo de 2000, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, CAPRECOM, reconoció pensión de jubilación en favor del señor Lautier Salas, quien falleció el 12 de junio de 2014.

Señala que, con ocasión al fallecimiento del causante, mediante Resolución RDP 021735 del 15 de julio de 2014, CAPRECOM reconoció provisionalmente a la accionante, en calidad de cónyuge, pensión de sobrevivientes, en cuantía del 100% de la pensión de la mesada pensional, a partir del 13 de junio de 2014, siendo posteriormente reconocida de manera definitiva mediante Resolución RDP 038590 del 21 de septiembre de 2015.

Indica la accionante, que, con posterioridad, se presenta a reclamar la prestación económica, la joven MARÍA CAMILA SALAS GARCIA, en calidad de hija, quien para la época de fallecimiento del causante tenía 11 años.

Manifiesta que mediante Resolución RDP 028013 del 20 de octubre de 2021, la entidad accionada ajusta la Resolución RDP 038590 DE 2015 y reconoce la pensión de sobrevivientes en favor de las reclamantes en un 50% para cada una, indicando que la prestación económica sería manera vitalicia para la accionante y en favor de la joven MARÍA CAMILA SALAS GARCIA, hasta los 25 años edad, siempre y cuanto acreditara estudios. Se indica que dicho acto administrativo tendrá efectos fiscales a partir de la inclusión en nómina de la resolución.

Refiere, además, que se realizarán las operaciones aritméticas correspondientes a fin de determinar el mayor valor pagado a la accionante, con el fin de realizar las compensaciones correspondientes.

Frente a esta decisión, la accionante interpuso los recursos de ley, siendo confirmado en todas sus partes.

Arguye la señora Celina del Socorro García de Salas, que pasó de recibir como mesada pensional la suma de \$945.658 (50% de la mesada pensional) a recibir \$425.529, debido al reintegro por compensación adelantado por la accionada, hecho que afecta su mínimo vital; pues según manifiesta, tiene obligaciones bancarias adquiridas, su casa de habitación se encuentra embargada y no puede cubrir gastos que le son propios como alimentación, servicios públicos y demás, aunado a diversas afectaciones de salud que actualmente padece.

En auto del **16 de diciembre de 2022 se ADMITIÓ** la tutela. Notificado el accionado dio respuesta así:

Expresa que, en efecto, fueron emitidos los actos administrativos que relaciona la accionante. Señala que las compensaciones objeto de la presente acción constitucional tienen fundamento legal en el artículo 5 de la ley 1204 de 2008, razón por la cual, esta medida se adopta en aras de proteger el erario.

Señala además que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para dirimir la situación que plantea la accionante, por tanto, no se cumple con el criterio de subsidiaridad, debiendo ser dirimido por el Juez natural.

Finalmente señala que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, no es la competente para resolver el objeto de la acción de tutela, en lo relativo al reintegro y pago de compensaciones, pues esta Entidad, solo tiene dentro de sus funciones administrar la nómina y realizar el reporte al consorcio FOPEP de los actos administrativos expedidos por la entidad, mediante el cual se reconozcan derechos pensionales; pero corresponde al Ministerio de Trabajo, a través de su cuenta adscrita “Fondo de pensiones públicas del nivel nacional” ejecutar los pagos correspondientes.

Indica además que existe un contrato de encargo fiduciario entre el Ministerio Del Trabajo y el consorcio FOPEP- 2015, a fin de administrar los recursos del “Fondo de pensiones públicas del nivel nacional”, siendo, por tanto, dicho consorcio el encargado de efectuar los pagos, y por tanto es el competente para

resolver la solicitud de la accionante, debiéndose, por lo tanto, procurar su integración a la presente acción constitucional.

En **sentencia del 19 de enero de 2023**, se denegó el amparo constitucional, por considerar que la accionante puede acudir a la jurisdicción ordinaria en materia laboral, para dirimir el conflicto que plantea en la acción constitucional.

Se indica además que, en el presente asunto, no se logró demostrar con el acervo probatorio, la configuración de un perjuicio irremediable a los derechos de la accionante, situación que habilitaría de manera excepcional al Juez de tutela, para asumir una competencia que le es extraña.

En cuanto a la afectación al mínimo vital, no se logra demostrar, que en efecto, exista tal perjuicio, pues de la prueba allegada con el escrito de tutela, no puede inferirse tal situación.

La decisión fue **impugnada** por las accionadas así:

Manifiesta la accionante, que, en efecto, se encuentra demostrada la afectación al mínimo vital, pues pasó de recibir el 100% de la pensión de sobreviviente con ocasión a fallecimiento de su cónyuge, a recibir solo una cuarta parte, y resulta evidente, que con la mesada que recibe de manera mensual, es imposible cubrir los gastos propios.

I. CONSIDERACIONES

Tratándose de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha dejado sentado que *“la debida integración del contradictorio por parte de los jueces de tutela, se constituye en una forma de materializar el derecho fundamental al debido proceso, y es una manifestación de los principios de informalidad y oficiosidad, en tanto “[el contenido del fallo no puede ser inhibitorio]” (Decreto 2591 de 1991, Art. 29, parágrafo)¹*.

¹ A- 165 de 2008, Corte Constitucional.

Conforme lo anterior, puntualiza que el juez como director del proceso, entre otros deberes, tiene el de integrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la presunta afectación del derecho fundamental, en el cumplimiento de una eventual orden de amparo y resulten afectadas con la decisión, para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 de la constitución, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y hacer uso de los recursos defensivos que ofrece el ordenamiento jurídico.

Sobre el particular el órgano de cierre constitucional en **Auto 09 de 1994, reiterado en Auto A294 de 2001** expresó:

“La integración del contradictorio supone establecer los extremos de la relación procesal para asegurar que la acción se entabla frente a quienes puede deducirse la pretensión formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la participación de quienes intervienen en el proceso se legitima en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar legitimado en la causa es tanto como tener derecho, por una de las partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita como legítimo contradictor de tales pretensiones.”

En **Auto A393 de 2019**, dicha corporación advirtió:

“(…) corresponde a la autoridad judicial desplegar las actuaciones necesarias para garantizar la participación de las partes en el proceso, a efecto de determinar si hubo o no la vulneración de los derechos fundamentales que se reclaman. Por el contrario, la no vinculación al proceso o su indebida notificación genera una irregularidad que vulnera el derecho al debido proceso e impide el conocimiento del asunto sometido a consideración de esta Corte”.

Por lo esgrimido, cuando el accionante no integra la causa pasiva con todos los sujetos cuyo concurso es necesario para establecer la presunta amenaza o violación de los derechos alegados, y pudieren resultar afectados con la decisión que se adopte, o a quienes deba impartirse órdenes específicas, es deber del juez constitucional disponer su vinculación oficiosa, acudiendo a los elementos de juicio que obran en el expediente, permitiéndoles intervenir en el litigio a fin de ser escuchados, y garantizarles su derecho a la defensa².

² En el Auto 536 de 2015 el Pleno de esta Corporación sistematizó las reglas que se derivan de los deberes de los jueces de tutela ante la indebida integración del contradictorio, esto es, cuando el accionante dirige el amparo en contra de una parte, pero el juez de tutela encuentra que existen

De otro lado, dispone el **artículo 133 del CGP** aplicable al caso por remisión del **artículo 41 del Decreto 2591 de 1991**:

“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...)

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado”.

Dispone el **artículo 133-8 del CGP**: cuando la autoridad judicial omita el deber jurídico de vincular debidamente el contradictorio, el trámite dado a la solicitud de tutela se encuentra viciado de nulidad, precisamente derivada del hecho de no haberse practicado la vinculación al proceso de todos los sujetos cuya participación es imprescindible para tramitar válidamente el juicio.

Así las cosas, vistas las manifestaciones expresadas en los hechos de la solicitud de amparo constitucional, así como el informe rendido por la accionada, que refiere competencia en más entidades para resolver lo pretendido por el accionante, la Sala identifica la necesidad de integrar la litis por pasiva con tales entidades, por cuanto podrían estar comprometidas con la vulneración o amenaza de derechos fundamentales alegada por el accionante, y en tal virtud, debe garantizársele su derecho de defensa y debido proceso para que se

otras personas, entidades o instituciones que deben ser vinculadas al proceso, ya sea por tener un interés directo en la decisión o por ser potenciales destinatarias de las órdenes de protección de derechos fundamentales[107]:

- (i) Es deber del juez de tutela integrar el contradictorio en virtud del principio de oficiosidad. Una vez advierta que a pesar de que la tutela se entable contra un sujeto determinado, pero debe concurrir otro, el juez tiene la facultad oficiosa, antes de resolver el asunto, de vincular a la persona o entidad contra la cual ha debido obrar el demandante [108].
- (ii) Ese deber oficioso se aplica no solo cuando el accionante lo omite sino en los casos en que aparezca otro ente que por su actividad, funciones o actos ha debido ser vinculado.
- (iii) En el caso de la acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 20 del Decreto estatutario 2591 de 1991 no es posible emitir fallos inhibitorios, por lo que es deber del juez hacer uso de sus poderes oficiosos para garantizar el derecho de defensa a quienes puedan verse afectados con la decisión o tengan un interés legítimo en la misma, ordenando su vinculación.
- (iv) Si en el trámite de la acción puede deducirse razonablemente que se está ante una vulneración de un derecho fundamental pero el juez de primera instancia omitió integrar adecuadamente el contradictorio, dicha integración puede ser adelantada por el juez de segunda instancia o incluso por la Corte Constitucional. (En el sub examine aún no se aprecia tal vulneración).

pronuncie sobre los hechos y pretensiones de la acción, e impartirle las eventuales órdenes y exigirles su cumplimiento.

Bajo estas premisas, se declarará la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia proferida el 19 de enero de 2023, inclusive, para que se integre el contradictorio con **LA NACIÓN, MINISTERIO DEL TRABAJO - Fondo de pensiones públicas del nivel nacional y CONSORCIO FOPEP** a quien el *a quo* deberá notificar en debida forma, anexando al expediente las constancias respectivas de envío y recibo de todas las actuaciones notificadas en el curso del trámite.

Se exceptúa de la nulidad las notificaciones y contestación allegadas por las accionadas, así como la prueba documental debidamente arribada.

II. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD DE LO ACTUADO, dentro de la acción de tutela de la referencia, a partir de la sentencia de primera instancia proferida el 19 de enero de 2023, inclusive, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello- Antioquia. Se exceptúan de la nulidad la notificación y contestación de la accionada, así como la prueba documental debidamente arribada.

SEGUNDO: SE ORDENA la integración del contradictorio con **LA NACIÓN, MINISTERIO DEL TRABAJO -Fondo de pensiones públicas del nivel nacional y CONSORCIO FOPEP**, notificándolos en debida forma y anexando al expediente las constancias respectivas de envío y recibo de las actuaciones notificadas, según lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la decisión a las partes en la forma más eficaz, que asegure su conocimiento.

Devuélvase el expediente al Despacho de origen.

Los Magistrados

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>